

América Latina entre recursos y agencia: una región frente al nuevo orden global

Pia Amorín ,Uruguay, X edición.

Hablar de "nuevo orden global" implica aceptar, ante todo, que el sistema internacional atraviesa una transición profunda sin una arquitectura clara de llegada. No se trata simplemente de un reequilibrio de poder entre actores tradicionales, sino de una transformación más difusa: normas y reglas que pierden fuerza, mecanismos de coordinación y cooperación que se erosionan, y una creciente tensión en torno a la gestión de bienes y sistemas que hasta hace poco se daban por sentados. En ese escenario, América Latina vuelve a ser mencionada como una región "con potencial". Una categoría insistente que, para nuestro descrédito, dice menos sobre las tantas oportunidades reales de la región que sobre su dificultad estructural persistente para traducirlas en capacidad de acción sostenida.

Hoy es necesario cambiar la pregunta. Ya no es relevante seguir acumulando diagnósticos cuestionando si América Latina cuenta con activos estratégicos. Los tiene, y de manera evidente. La cuestión es si está en condiciones de actuar como sujeto político, capaz de incidir en la definición de prioridades, reglas y marcos de gobernanza, o si continuará ocupando un lugar funcional dentro de estrategias diseñadas por otros. Esa ambigüedad, entre centralidad material y marginalidad decisoria, que nos ha acompañado durante décadas, hoy es más costosa que nunca.

En el contexto global actual, la transición energética, la crisis climática y la reconfiguración de la seguridad alimentaria y logística están transformando recursos como el agua, la tierra, la biodiversidad y ciertos minerales críticos en infraestructuras geopolíticas. Es momento de que América Latina entienda que no es periférica en ese mapa, sino que es un territorio clave para la estabilidad (o la inestabilidad) de varios de los sistemas que sostienen la economía global. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la centralidad material no necesariamente deriva en influencia de manera automática. En cambio, allí donde faltan reglas claras, capacidad regulatoria

y continuidad institucional, son otros actores los que terminan definiendo las condiciones de acceso, uso y valorización de esos recursos.

Esta tensión revela, quizás con mayor claridad que nunca, uno de los rasgos estructurales más persistentes de nuestra región: la distancia entre abundancia material y debilidad institucional. América Latina nunca ha carecido de recursos ni de ideas; sí ha carecido, de forma desigual pero recurrente, de Estados con la capacidad suficiente para convertirlos en poder colectivo y sostenible. La diferencia es que, en el escenario actual, esa carencia deja de ser un problema estrictamente doméstico y se convierte en un factor que limita la soberanía efectiva y reduce el margen de negociación externa.

Como se ha señalado recientemente en distintos foros internacionales, la capacidad de incidencia real en el sistema internacional contemporáneo ya no depende únicamente del peso económico o militar, sino de algo más exigente: la posibilidad de producir reglas, normas y estándares, y de ofrecer soluciones creíbles a problemas sistémicos. En este terreno es donde América Latina suele llegar fragmentada, con marcos regulatorios heterogéneos, coordinación técnica escasa y volátil, y una diplomacia tradicionalista que, salvo excepciones, continúa siendo más reactiva que estratégica. Y el resultado es nuestra historia más repetida: una inserción internacional condicionada, donde la región adapta sus políticas a criterios definidos fuera de ella, incluso cuando esos criterios afectan directamente su modelo de desarrollo.

Sin embargo, toda crisis abre también una ventana de oportunidad, y la actual no es menor. América Latina comparte rasgos que, en este contexto, pueden convertirse en ventajas estructurales: una tradición, quizás imperfecta pero persistente, de compromiso multilateral, una experiencia prolongada en la gestión de crisis sociales y económicas, y un acervo normativo vinculado a derechos y políticas públicas que aún conserva legitimidad internacional. Convertir este capital en agencia exige algo más que consensos retóricos. Requiere capacidad estatal, coordinación regional selectiva y una visión estratégica responsable e intergeneracional.

Desde esta perspectiva, el rol que América Latina puede y debe asumir no es, una vez más, el de mediador abstracto ni el de proveedor pasivo de recursos fundamentales. Es el de constructor de gobernanza en ámbitos donde la arquitectura internacional se muestra claramente fracturada. Agua, alimentos, biodiversidad, transición energética y adaptación climática no son simplemente sectores prioritarios: son espacios donde la ausencia de reglas claras genera conflictos, desigualdades y externalidades que trascienden fronteras. Y es allí donde la región puede incidir

de manera sustantiva, si logra articular posiciones comunes, producir conocimiento propio y sostener propuestas institucionales que equilibren desarrollo, sostenibilidad y cohesión social.

Esto exige un tipo de liderazgo distinto del que ha predominado históricamente. No un liderazgo personalista ni meramente retórico o técnico, sino institucional, capaz de pensar en términos de región, de resistir la captura de intereses y de sostener decisiones más allá de los ciclos políticos. La integridad, en este marco, no es un atributo moral abstracto, sino una condición operativa esencial para generar confianza. La vocación de servicio no se expresa en declaraciones protocolares, sino en la capacidad de gobernar recursos estratégicos sin hipotecar el futuro. Y la proactividad no consiste en reaccionar con rapidez, sino en anticipar, diseñar y proponer antes de que las reglas queden fijadas.

América Latina no será central por inercia ni por reivindicación identitaria, sino por su capacidad de transformar recursos en reglas y experiencia en gobernanza. En un sistema internacional en transición, la diferencia entre adaptarse al orden que otros diseñan o contribuir a construirlo dependerá, en última instancia, de la calidad del liderazgo público que la región sea capaz de formar y sostener.

Para seguir conversando, algunas preguntas que dejan los autores:

La credibilidad macroeconómica y la previsibilidad regulatoria son condiciones previas a cualquier estrategia de desarrollo. Sin embargo, la región insiste en expandir el gasto, multiplicar regulaciones y renegociar contratos cada cuatro años. ¿Es viable posicionar a América Latina como socio estratégico global mientras sigamos operando bajo un modelo que penaliza la inversión de largo plazo y premia la dependencia del Estado?

¿Es posible consolidar instituciones creíbles mientras el liderazgo regional siga tratando al Estado como un instrumento de poder en vez de como un facilitador sujeto a resultados?

¿Qué condiciones institucionales necesita América Latina para transformar su centralidad material en capacidad real de incidencia en la gobernanza global?

¿Qué tipo de liderazgo público permitiría a la región pasar de adaptarse a reglas externas a contribuir activamente a su diseño?